

No. 39439

**Argentina
and
Peru**

Agreement on judicial assistance in criminal matters between the Argentine Republic and the Republic of Peru. Lima, 9 February 1999

Entry into force: *31 March 2001 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 26*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 7 July 2003*

**Argentine
et
Pérou**

Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre la République argentine et la République du Pérou. Lima, 9 février 1999

Entrée en vigueur : *31 mars 2001 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 26*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 7 juillet 2003*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO
DE
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
LA REPUBLICA DEL PERU

La República Argentina y la República del Perú; en adelante las Partes:

ANIMADOS por el propósito de intensificar la asistencia judicial y la cooperación en materia penal;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;

CONVENCIDOS de la necesidad de desarrollar acciones conjuntas de prevención, control y sanción del delito en todas sus formas, a través de la coordinación y ejecución de programas concretos y, de agilizar los mecanismos de asistencia judicial;

CONSCIENTES que el incremento de las actividades delictivas hace necesario el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y asistencia judicial en materia penal.

ACUERDAN:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

DEFINICIONES

1. Para los efectos del presente Acuerdo:

a. “Carta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia judicial” se entenderán como sinónimos;

b. “**Decomiso**” significa la privación con carácter definitivo de bienes productos o instrumentos del delito, por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

c. “**Producto del Delito**” significa bienes de cualquier índole, derivados u obtenidos directa o indirectamente por cualquier persona, de la comisión de un delito o el valor equivalente de tales bienes;

d. “**Bienes**” significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e. “**Embargo Preventivo, Secuestro o Incautación de Bienes**” significa la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, así como la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad competente.

ARTICULO 2

OBLIGACION DE ASISTENCIA MUTUA

1. Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y de sus respectivos ordenamientos jurídicos en la realización de investigaciones, juzgamientos y procedimientos penales iniciados por hechos cuyo conocimiento corresponde a las autoridades competentes de la Parte requirente.

2. Sin embargo, para la ejecución de inspecciones personales y registros, decomisos, embargo de bienes, de secuestros con fines probatorios e interceptación telefónica por mandato judicial debidamente motivado, así como para la ejecución de medidas que involucren algún tipo de coerción, la asistencia será prestada sólo si el hecho por el que se procede en la Parte requirente está previsto como delito también por la ley de la Parte requerida, o bien si resultare que la persona contra quien se procede ha expresado libremente su consentimiento en forma escrita.

ARTICULO 3

AMBITO DE APLICACION

1. Las Partes se prestarán asistencia mutua en el intercambio de información, pruebas, enjuiciamientos y actuaciones en materia penal. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:

a. Localización e identificación de personas y bienes;

b. Notificación de actos judiciales;

- c Remisión de documentos e informaciones judiciales;
 - d. Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;
 - e. Recepción de testimonios e interrogatorio de imputados;
 - f. Citación y traslado voluntario de personas para los efectos del presente Acuerdo, en calidad de testigos, imputados y peritos;
 - g. Traslado de Personas detenidas, para rendir testimonio en el territorio de la Parte requirente;
 - h. Embargo, secuestro y decomiso de bienes;
 - i. Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la Parte requerida lo permita y de conformidad con su legislación.
2. Las Partes facilitarán el ingreso y la presencia en el territorio de la Parte requerida de autoridades competentes de la Parte requirente a fin que asistan y participen en las actuaciones solicitadas, siempre que ello no contravenga lo dispuesto en su legislación interna. Los funcionarios de la Parte requirente actuarán conforme a la autorización de las autoridades competentes de la Parte requerida.
3. Las Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar asistencia conforme a este artículo.

ARTICULO 4

LIMITACIONES A LA ASISTENCIA

1. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este Acuerdo para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia judicial, sin previa autorización de la Parte requirente.
2. Este Acuerdo no facultará a las Partes para ejecutar, en el territorio de la Parte donde se realizan las diligencias, funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de dicha Parte de conformidad con su legislación interna.
3. Este Acuerdo no se aplicará a:
 - a. La detención de personas con el fin que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición;
 - b. El traslado de personas condenadas con el objeto que cumplan sentencia penal;
 - c. La asistencia a particulares o terceros Estados.

ARTICULO 5

ASISTENCIA CONDICIONADA

1. La autoridad competente de la Parte requerida, si determina que la ejecución de una solicitud habrá de obstaculizar alguna investigación o procedimiento penal que se esté realizando en dicha Parte, podrá aplazar su cumplimiento o condicionarlo en la forma que considere necesaria.
2. La Autoridad Central de la Parte Requerida pondrá en conocimiento de la Autoridad Central de la Parte Requirente lo expuesto en el párrafo anterior, a fin que ésta acepte la asistencia condicionada en cuyo caso respetará las condiciones establecidas.
3. Cuando una solicitud de asistencia judicial no pudiese ser cumplida parcial o totalmente, la Parte requerida lo comunicará a la Parte requirente señalando expresamente los motivos o causas del incumplimiento, caso en el cual la Parte requirente decidirá si insiste en la solicitud o desiste de ella.

ARTICULO 6

DENEGACION DE LA ASISTENCIA

1. La Parte requerida podrá negar la asistencia cuando:
 - a. La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento jurídico o no sea conforme a las disposiciones de este Acuerdo;
 - b. Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una investigación o proceso penal en curso en dicha Parte, salvo lo dispuesto en el Artículo 5 del presente Acuerdo;
 - c. La solicitud de asistencia judicial que se refiera a un delito respecto del cual la persona haya sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, o habiéndosela condenado, se hubiere cumplido o extinguido la pena;
 - d. La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación;
 - e. El otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales de la Parte requerida;
 - f. La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito político, militar o conexo a éstos.
2. La Parte requerida informará a la Parte Requirente la denegación de la asistencia mediante escrito fundamentado.

ARTICULO 7

AUTORIDAD CENTRAL

1. Para efectos del presente Acuerdo, la Autoridad Central es, respecto de Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y para la República del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. La Autoridad Central de la Parte requirente es la que transmite los pedidos de asistencia judicial a que se refiere el presente Acuerdo, que emanan de sus tribunales o autoridades.
3. Las Autoridades Centrales de las dos Partes establecerán comunicación directa entre ellas.

ARTICULO 8

AUTORIDAD COMPETENTE

Las Autoridades Competentes son en la República Argentina, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y en la República del Perú el Poder Judicial y el Ministerio Público.

TITULO II

OBTENCION DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA

ARTICULO 9

LEY APLICABLE

1. Las solicitudes serán cumplidas de conformidad con la legislación de la Parte requerida, salvo disposición en contrario del presente Acuerdo.
2. La Parte requerida podrá prestar la asistencia judicial de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud de la Parte requirente, salvo cuando éstas sean incompatibles con su ley interna.

ARTICULO 10

CONFIDENCIALIDAD

1. La Parte requerida mantendrá bajo reserva la solicitud de asistencia judicial, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento.
2. Si para el cumplimiento o ejecución del requerimiento fuere necesario el levantamiento de la reserva, la Parte requerida solicitará su aprobación a la Parte requirente, mediante comunicación escrita, sin la cual no se ejecutará la solicitud.
3. La Parte requirente mantendrá la reserva de las pruebas e información proporcionadas por la Parte requerida, salvo que su levantamiento sea necesario para la investigación o procedimiento descritos en la solicitud.

ARTICULO 11

COMPARECENCIA ANTE LA PARTE REQUIRENTE

1. La solicitud de asistencia judicial enviada a las autoridades competentes de la Parte requerida, que tenga por objeto la citación de un imputado, testigo o perito ante las autoridades competentes de la Parte requirente, deberá ser transmitida por la Autoridad Central de la Parte requirente por lo menos 45 días antes de la fecha fijada para la ejecución de la diligencia objeto de la solicitud.
En caso contrario, la Autoridad Central requerida lo devolverá a la Parte Requirente. No obstante, la Autoridad Central de la Parte requerida podrá solicitar por escrito a la Parte requirente la ampliación del término.
2. La autoridad competente de la Parte requerida procederá a efectuar la citación según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o sanciones previstas en la legislación de la Parte requirente para el caso de no comparecencia.
3. La solicitud de asistencia judicial deberá mencionar el importe de viáticos, honorarios e indemnizaciones que pueda percibir la persona citada con motivo de su traslado. La persona requerida, imputado, testigo o perito, será informada de la clase y monto de los gastos que la Parte requirente haya consentido en pagarle.
4. Toda persona que comparezca en el territorio de la Parte requirente en cumplimiento de una solicitud de asistencia, estará sujeta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de esa Parte.

ARTICULO 12

INMUNIDAD RESPECTO A LA COMPARECENCIA

1. Ningún testigo o perito, cualquiera sea su nacionalidad, que en virtud de una citación comparezca ante las autoridades judiciales de la Parte requirente, será perseguido ni detenido o sometido a ninguna otra restricción de su libertad individual en el territorio de dicha Parte, por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida.

2. Una persona, cualquiera sea su nacionalidad, que exprese su consentimiento por escrito para comparecer ante las autoridades competentes de la Parte requirente, con el fin de responder por hechos que son objeto de un proceso, no podrá ser procesada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su libertad personal por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida y no señalados en la citación.

3. La inmunidad respecto a la comparecencia prevista en el presente artículo, dejará de tener efecto cuando la persona, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte requirente durante quince días calendario luego de que ya no se requiera su presencia, permanezca aún en dicho territorio o regrese a él después de haberlo abandonado, salvo circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.

ARTICULO 13

TRASLADO TEMPORAL DEL DETENIDO

1. Toda persona detenida en la Parte requerida, que exprese su consentimiento por escrito, para comparecer en la Parte requirente con fines de dar testimonio, confrontar o por cualquier otra necesidad del proceso, se trasladará temporalmente a la Parte requirente, con la condición de devolver al detenido a la Parte requerida en el plazo indicado por dicha Parte y con sujeción a las disposiciones del artículo 12 en la medida en que sean aplicables.

2. Podrá denegarse el traslado:

a. Si su presencia es necesaria en un proceso penal en curso en el territorio de la Parte requerida;

b. Si su traslado pudiera ser causa de que se prolongara su detención, o;

c. Si existen otras circunstancias excepcionales que se opongan a su traslado a la Parte requirente.

3. La persona trasladada deberá permanecer detenida en el territorio de la Parte requirente, mientras así lo determine la autoridad judicial de la Parte requerida.

ARTICULO 14

MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 y de acuerdo con las previsiones del presente artículo, la autoridad competente de una de las Partes podrá solicitar a la otra que obtenga una orden con el propósito de embargar preventivamente, secuestrar o incautar bienes para asegurar que éstos estén disponibles para la ejecución de una orden de decomiso.
2. Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:
 - a. Una copia de la orden de embargo preventivo, secuestro o incautación.
 - b. Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes.
 - c. Si fuera posible, una descripción de los bienes, su valor comercial respecto de los cuales se pretende se efectúe la medida provisional o cautelar, o que se considere estén disponibles para el embargo preventivo, secuestro o la incautación y la relación de éstos con la persona contra la que se inició o se iniciará un procedimiento judicial.
 - d. Una declaración de la suma que se pretende embargar, secuestrar o incautar y de los fundamentos del cálculo de la misma.
 - e. La estimación del tiempo que transcurrirá antes que el caso sea enviado a juicio y del tiempo que pasará hasta que se dicte la decisión judicial definitiva.
3. La autoridad competente de la Parte requirente informará a la autoridad competente de la Parte requerida de cualquier modificación en el plazo a que se hace referencia en la letra e) del párrafo anterior y al hacerlo, indicará la etapa de procedimiento que se hubiera alcanzado.
4. Las autoridades competentes de cada uno de las Partes informará con prontitud sobre el ejercicio de cualquier recurso o de una decisión adoptada respecto del embargo, secuestro o incautación solicitada o adoptada.
5. La autoridad competente de la Parte requerida podrá imponer una condición que limite la duración de la medida solicitada, la cual será notificada con prontitud a la autoridad competente de la Parte requirente, explicando su motivación.
6. Cualquier requerimiento deberá ser ejecutado únicamente conforme a la legislación interna de la Parte requerida, y en particular, en observancia y garantía de los derechos de cualquier persona que pueda ser afectada por la ejecución de la medida.

ARTICULO 15

REMISION DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES O ELEMENTOS DE PRUEBA

1. La Parte requerida podrá remitir copias de los documentos, expedientes o elementos de prueba solicitados. Si la Parte requirente solicita expresamente la remisión de los originales, la Parte requerida procederá a ello en la medida de lo posible.
2. La Parte requirente está obligada a devolver los originales dichos documentos a la brevedad posible y, a más tardar, al término del proceso, a menos que la Parte requerida renuncie a ello.
3. Los derechos invocados por terceros sobre documentos, expedientes o elementos de prueba en la Parte requerida no impedirán la remisión de la copia certificada a la Parte requirente.

ARTICULO 16

PRODUCTOS DEL DELITO

1. Las autoridades competentes de la Parte requerida, previa solicitud de asistencia judicial, procederán a realizar aquellas averiguaciones, dentro de su jurisdicción, que permitan determinar si se encuentra cualquier producto o instrumento de un delito y notificarán los resultados o las pesquisas a las autoridades competentes de la Parte requirente a través de las Autoridades Centrales. Al efectuar el requerimiento la Parte requirente notificará a la Parte requerida los hechos por los cuales entiende que los productos o instrumentos del delito se pueden hallar en su jurisdicción.
2. Cuando en cumplimiento del párrafo 1 se encuentren los productos o instrumentos del delito objeto de la solicitud de asistencia judicial, la Parte requerida a pedido de la Parte requirente, tomará las medidas necesarias permitidas por sus leyes para evitar cualquier transacción, transferencia o enajenación de los mismos mientras esté pendiente una decisión definitiva sobre dichos productos o instrumentos.
3. Cuando el condenado por un delito mantenga la propiedad, posesión o tenencia de los productos o instrumentos de dicho delito y en la sentencia se imponga una obligación de contenido pecuniario, o se ordene el decomiso de un bien, o se imponga cualquier otra medida de carácter definitivo, la Parte requerida podrá ejecutar la sentencia en la medida en que su legislación interna lo permita.
4. Cuando el condenado por un delito ha dispuesto de los productos o instrumentos del mismo, la autoridad competente de la Parte requerida, a solicitud de la autoridad competente de la Parte requirente, determinará si el tercero los obtuvo sin haber sabido o sospechado que se trataba o podía haberse tratado de los productos o instrumentos del delito. Si la autoridad competente de la Parte requerida determina que el tercero no actuó de buena fe, ordenará el decomiso de los bienes.

ARTICULO 17

EJECUCION DE ORDENES DE DECOMISO

1. En el caso que la solicitud de asistencia se refiera a una orden de decomiso, la autoridad competente de la Parte requerida podrá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2:
 - a. Ejecutar la orden de decomiso emitida por una autoridad competente de la Parte requirente relativa a los instrumentos o productos del delito; o
 - b. Iniciar un procedimiento con el objeto de obtener una orden de decomiso, conforme a su legislación interna.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 21 del presente Acuerdo, para los efectos del presente artículo, deberá incluirse lo siguiente:
 - a. Una copia de la orden de decomiso, debidamente certificada por el funcionario judicial que la expidió;
 - b. Información sobre las pruebas que sustentan la base sobre la cual se dictó la orden de decomiso;
 - c. Información que indique que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada;
 - d. Cuando corresponda la identificación de los bienes disponibles para la ejecución o los bienes respecto de los cuales se solicita la asistencia judicial, declarando la relación existente entre esos bienes y la persona contra la cual se expidió la orden de decomiso;
 - e. Cuando sea procedente y se conozca, la información acerca de la existencia de antecedentes relacionados con derechos o intereses legítimos de terceras personas sobre los bienes objeto del requerimiento;
 - f. Cualquier otra información que pueda ayudar a los fines de ejecución de la solicitud de asistencia judicial.
3. Cuando la legislación interna de la Parte requerida no permita ejecutar una solicitud en su totalidad, ésta podrá darle cumplimiento en la medida en que fuere posible y lo comunicará a través de la Autoridad Central.
4. La autoridad competente de la Parte requerida podrá solicitar información o pruebas adicionales con el fin de llevar a cabo el requerimiento.
5. La orden de decomiso se ejecutará de acuerdo con la legislación interna de la Parte requerida y, en particular en observancia de los derechos de cualquier persona que pueda ser afectada por su ejecución.
6. Las Partes podrán acordar en cada caso particular, y según la naturaleza e importancia de la colaboración prestada, el quantum en el reparto de los bienes obtenidos como resultado de la ejecución del requerimiento por la Parte requerida en cumplimiento de este artículo.

ARTICULO 18

INTERESES DE TERCEROS DE BUENA FE SOBRE LOS BIENES

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, las autoridades competentes de la Parte requerida tomarán según su legislación, las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de terceras personas de buena fe sobre los bienes afectados por la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.

Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo, secuestro, incautación o decomiso, podrá interponer los recursos previstos en la legislación interna de la Parte requerida ante la autoridad competente de dicha Parte.

ARTICULO 19

NOTIFICACION DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PROCESALES Y DE RESOLUCIONES JUDICIALES

1. La Parte requerida procederá a la notificación de los actos y documentos procesales y de las resoluciones judiciales que le fueren enviadas con ese fin por la Parte requirente.

2. Esta notificación podrá efectuarse mediante la simple entrega al destinatario del documento o la resolución. Si la Parte requirente lo solicita expresamente, la Parte requerida efectuará la notificación en una de las formas previstas por su legislación para notificaciones análogas o en alguna forma especial que sea compatible con dicha legislación.

3. Servirá como prueba de la notificación del documento procesal una copia fechada y firmada por el destinatario o una declaración de la Parte requerida en la que se haga constar el hecho, la forma, y la fecha de la notificación. Cualquiera de estos documentos será enviado inmediatamente a la Parte requirente. Si esta última lo solicita, la Parte requerida precisará si la notificación se ha efectuado de conformidad con su ley. Si no hubiere podido efectuarse la notificación, la Parte requerida dará a conocer inmediatamente el motivo a la Parte requirente.

TITULO III

PROCEDIMIENTO

ARTICULO 20

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito. Bajo circunstancias de carácter urgente o en el caso que sea permitido por la Parte requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o por cualquier otro medio electrónico, pero deberán ser formalizadas a la mayor brevedad posible y contendrán al menos la siguiente información:

- a. la autoridad de la que emana y, en su caso, la autoridad encargada del procedimiento penal en la Parte requirente;
- b. el objeto y el motivo del pedido;
- c. si fuera el caso, el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección de la persona que tenga relación con la solicitud de asistencia;
- d. una descripción de los hechos que dan lugar a la investigación en la Parte requirente, adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el texto de las disposiciones legales pertinentes;
- e. el término dentro del cual la Parte requirente desea que la solicitud sea cumplida.

2. La solicitud contendrá además:

- a. En el caso de aplicación del derecho extranjero en la ejecución del pedido, artículo 9, numeral 2, el texto de las disposiciones legales aplicables en la Parte requirente y el motivo de su aplicación;
- b. En el caso de participación de personas en el proceso, artículo 3, numeral 2, la designación de la persona que asistirá y el motivo de su presencia;
- c. En el caso de notificación de los actos y documentos del proceso, artículos 11 y 18, el nombre y la dirección del destinatario de los documentos y citaciones.
- d. En el caso de citación de testigos o peritos, artículo 11, la indicación que la Parte requirente asumirá los viáticos, honorarios e indemnizaciones, los cuales serán pagados por anticipado, si se lo solicitan.
- e. En el caso de entrega de personas detenidas, artículo 13, el nombre completo de ellas.

ARTICULO 21

EJECUCION DE LA SOLICITUD

1. Si la solicitud no se ajusta a las disposiciones del presente Acuerdo, la Autoridad Central de la Parte requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte requirente solicitándole modificarlo o completarlo en el plazo más breve, sin perjuicio de la adopción de medidas provisionales a que se refiere el artículo 14.

2. Si la solicitud se ajusta al Acuerdo, la Autoridad Central de la Parte requerida lo derivará inmediatamente a la autoridad competente.

3. Después de la ejecución de la solicitud, la autoridad competente lo remitirá a la Autoridad Central de la Parte requerida, así como las informaciones y elementos de prueba que se hubieran obtenido. La Autoridad Central se asegurará que la ejecución sea fiel y completa, y comunicará los resultados a la Autoridad Central de la Parte requirente.

ARTICULO 22

DISPENSA DE LEGALIZACION

1. Los documentos, expedientes o elementos de prueba transmitidos en aplicación del presente Acuerdo estarán exentos de todas las formalidades de legalización.

2. Los documentos, expedientes o elementos de prueba transmitidos por la Autoridad Central de la Parte requerida serán aceptados como medios de prueba cuando estuvieran debidamente certificados por la autoridad competente.

ARTICULO 23

GASTOS GENERADOS POR LA EJECUCION DE LA SOLICITUD

1. La Parte requirente asumirá únicamente los siguientes gastos efectuados con motivo de la ejecución de una solicitud:

- a. indemnizaciones, gastos de viaje y viáticos de testigos y de sus eventuales representantes;
- b. gastos relativos a la entrega de personas detenidas;
- c. honorarios, gastos de viaje y otros gastos de los pcritos.

2. Si se presume que la ejecución del pedido generará gastos extraordinarios, la Parte requerida lo informará a la Parte requirente a fin de fijar las condiciones a las que estará sujeta la ejecución de la solicitud.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

OTROS ACUERDOS O CONVENIOS Y LEGISLACIONES NACIONALES

ARTICULO 24

Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán la asistencia más amplia que haya sido o sea convenida entre las Partes, en otros acuerdos o convenios, o que resultase de la legislación interna o de una práctica establecida.

ARTICULO 25

CONSULTAS

1. Si lo consideran necesario, las Autoridades Centrales, verbalmente o por escrito, intercambiarán opiniones sobre la aplicación o la ejecución del presente Acuerdo, de manera general o en un caso particular.
2. Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación de este Acuerdo será resuelta por consulta entre las Partes por vía diplomática.

ARTICULO 26

ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

El presente Acuerdo deberá ser ratificado y entrará en vigor a los treinta (30) días a partir de la fecha del intercambio de los respectivos instrumentos de ratificación.

Este Acuerdo tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo, mediante notificación escrita a través de la vía diplomática.

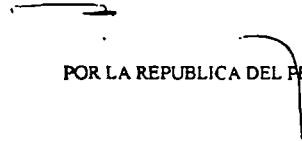
La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha notificación.

Hecho en *Lima* a los *9* días del mes de febrero de 1999, en dos ejemplares originales, ambos igualmente válidos.

POR LA REPUBLICA ARGENTINA



POR LA REPUBLICA DEL PERU



[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT ON JUDICIAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF
PERU

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Peru, hereinafter the Parties,

Prompted by the desire to intensify judicial assistance and cooperation in criminal matters;

Recognizing that the fight against crime is a shared responsibility of the international community;

Convinced of the need to take joint action to prevent, monitor and punish crime in all its manifestations through the coordination and implementation of specific programmes and to streamline mechanisms of judicial assistance; and

Aware that the increase in criminal activities makes it necessary to strengthen mechanisms for judicial assistance and cooperation in criminal matters;

Have agreed as follows:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

(a) "Letters rogatory, rogatory commission and request for judicial assistance" shall be regarded as synonymous;

(b) "Confiscation" means permanent removal of property, proceeds or instruments of crime pursuant to the decision of a court or other competent authority;

(c) "Proceeds of crime" means property of any kind directly or indirectly derived or realized by any individual as a result of the commission of an offence, or the equivalent value of such property;

(d) "Property" means any kind of assets, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title or other rights thereto; and

(e) "Preventive embargo, seizure or impoundment of property" means temporary prohibition of the transfer, conversion, disposal or release of property and temporary safekeeping or control of property pursuant to an order from a court or other competent authority.

Article 2. Obligation of Reciprocal Assistance

1. The Parties undertake to assist each other, in accordance with the provisions of this Agreement and of their respective legal regimes, in conducting investigations, trials and

criminal proceedings initiated in respect of acts which fall within the jurisdiction of the competent authorities of the requesting Party.

2. However, in the case of searches of persons or records, confiscations, freezing of assets, seizure of evidence or wiretaps pursuant to a court order issued on valid grounds, or in the execution of measures involving any form of coercion, assistance shall be provided only if the act in respect of which proceedings are being taken by the requesting Party is also considered an offence under the law of the requested Party or if the person against whom proceedings are being taken has freely consented thereto in writing.

Article 3. Scope of application

1. The Parties shall assist one another in the exchange of information, evidence, judgements and proceedings in criminal matters. Such assistance shall include, inter alia:

- (a) Location and identification of persons and property;
- (b) Service of process;
- (c) Delivery of judicial documents and information;
- (d) Execution of searches of private property and judicial inspections;
- (e) Taking of testimony and interrogation of defendants;
- (f) Summoning and voluntary transfer of witnesses, defendants or experts for the purposes of this Agreement;
- (g) Transfer of persons in custody to give testimony in the territory of the requesting Party;
- (h) Embargo, seizure and confiscation of goods; or
- (i) Any other form of assistance, provided that it is permitted under, and in accordance with, the law of the requested Party.

2. The Parties shall facilitate the entry into and presence in the territory of the requested Party of competent authorities of the requesting Party for the purpose of attending and participating in the conduct of the requested proceedings, provided that this does not conflict with the provisions of its domestic law. Officials of the requesting Party shall act in accordance with the authorization of the competent authorities of the requested Party.

3. The Parties shall not invoke banking secrecy as grounds for refusing to provide assistance under this article.

Article 4. Limits on Assistance

1. The requesting Party shall not, without the prior consent of the requested Party, use any information or evidence obtained pursuant to this Agreement for purposes other than those stated in the request for judicial assistance.

2. This Agreement shall not empower the Parties to perform, in the territory of the Party where the measures are being carried out, functions reserved exclusively for the authorities of that Party under its domestic law.

3. This Agreement shall not apply to:

- (a) The detention of persons for purposes of extradition, or to extradition requests;
- (b) The transfer of convicted persons for the purpose of serving a sentence;
- (c) Assistance to individuals or third States.

Article 5. Conditional assistance

1. Should the competent authority of the requested Party determine that execution of a request would interfere with a criminal investigation or proceedings under way in that Party, it may postpone the execution or place such conditions thereon as it deems necessary.

2. The central authority of the requested Party shall so inform the central authority of the requesting Party to see whether the latter agrees to the conditional assistance, in which case it shall respect the conditions outlined.

3. Where the requested Party cannot comply in whole or in part with a request for judicial assistance, it shall inform the requesting Party, stating the specific reasons or grounds for its non-compliance, in which case the requesting Party shall decide whether to maintain or withdraw the request.

Article 6. Refusal of assistance

1. The requested Party may refuse to assist if:

(a) The request for judicial assistance is contrary to its legal regime or is not in conformity with the provisions of this Agreement;

(b) It believes that execution of the request would interfere with a criminal investigation or proceedings already instituted in that Party, except as provided in article 5 of this Agreement;

(c) The request for judicial assistance relates to an offence in respect of which the person has been found not guilty or, if convicted, has served a sentence, or the sentence has been extinguished;

(d) The investigation has been opened for the purpose of prosecuting or discriminating in any way against a person or group of persons on grounds of race, sex, social status, nationality, religion, ideology or any other form of discrimination;

(e) The granting of assistance may affect the public order, sovereignty, national security or fundamental public interests of the requested Party; or

(f) The request for judicial assistance refers to a political or military offence or is related thereto.

2. The requested Party shall inform the requesting Party in writing of its refusal and shall state its reasons for so doing.

Article 7. Central authorities

1. For the purposes of this Agreement, the central authority shall be, in the case of Argentina, the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship and, in the case of the Republic of Peru, the Ministry of Foreign Affairs.

2. The central authority of the requesting Party is the authority which transmits requests for judicial assistance covered by this Agreement and originating from its courts or authorities.

3. The central authorities of the two Parties shall establish direct communication with each other.

Article 8. Competent authority

The Competent Authorities shall be, in the Argentine Republic, the judicial authorities and the Justice Department and, in the Republic of Peru, the Public Prosecutor's Office.

CHAPTER II. OBTAINING EVIDENCE

Article 9. Applicable law

1. Unless otherwise provided in this Agreement, requests shall be executed in accordance with the law of the requested Party.

2. The requested Party may provide judicial assistance in accordance with the special forms and procedures indicated in the request from the requesting Party, unless these are incompatible with its domestic law.

Article 10. Confidentiality

1. The requested Party shall keep the request for judicial assistance confidential unless its disclosure is necessary for the execution of the request.

2. If it is necessary to lift the confidentiality requirement in order to comply with or execute the request, the requested Party shall seek the requesting Party's approval, in writing, failing which the request shall not be executed.

3. The requesting Party shall keep the evidence and information provided by the requested Party confidential unless its disclosure is necessary for the investigation or proceedings outlined in the request.

Article 11. Appearance before the requesting party

1. Any request for judicial assistance sent to the competent authorities of the requested Party that involves a summons for a defendant, witness or expert to appear before the competent authorities of the requesting Party shall be transmitted through the central authority of the requesting Party at least 45 days prior to the date set for the proceedings referred to in the request.

Otherwise, the central authority of the requested Party shall return the request to the requesting Party. Nonetheless, the central authority of the requested Party may ask the requesting Party in writing for an extension of the deadline.

2. The competent authority of the requested Party shall proceed to serve the summons in accordance with the request formulated, but without giving effect to the clauses pertain-

ing to restraint or punishment provided under the law of the requesting Party for failure to appear.

3. The request for judicial assistance shall mention the amount of any per diem, honorarium or compensation payable to the person summoned in connection with his or her travel. The requested person, defendant, witness or expert shall be informed of the nature and amount of the expenses which the requesting Party has agreed to cover.

4. Anyone who appears in the territory of the requesting Party in response to a request for assistance shall be subject to the provisions of that Party's law.

Article 12. Immunity in respect of testimony

1. No witness or expert, irrespective of nationality, who appears before the competent authority of the requesting Party in response to a summons shall be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of personal freedom in the territory of the said Party for acts or sentences predating his or her departure from the territory of the requesting Party.

2. No person, irrespective of nationality, who gives consent, in writing, to appear before the competent authorities of the requesting Party in order to answer for acts that are the subject of proceedings may be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of personal freedom for acts or sentences predating his or her departure from the territory of the requested Party other than those to which the summons relates.

3. The immunity in respect of testimony referred to in this article shall cease if the person, having had an opportunity to leave the territory of the requesting Party within 15 days of the date on which his or her presence is no longer required, remains in the said territory or, after leaving, returns to it, except in cases of unforeseeable circumstances or force majeure.

Article 13. Temporary transfer of persons in custody

1. Any person in custody in the requested Party who gives consent, in writing, to appear in the requesting Party in order to give testimony or face questioning or for any other purpose relating to the trial shall be transferred temporarily to the requesting Party on condition that he or she shall be returned to the requested Party within the time period indicated by the latter Party and subject to the provisions of article 12 insofar as they apply.

2. The transfer may be refused:

(a) If the person's presence is required at a criminal trial currently in process in the territory of the requested Party;

(b) If the transfer might result in prolonging his or her period of detention; or

(c) If there are other special circumstances which prevent his or her transfer to the requesting Party.

3. The transferred person shall remain in custody in the territory of the requesting Party for the period of time established by the judicial authority of the requested Party.

Article 14. Provisional or Precautionary Measures

1. Without prejudice to the provisions of article 2 and in accordance with the provisions of this article, the competent authority of either Party may ask the other to obtain an order for the purpose of placing a preventive embargo on, seizing or impounding property in order to ensure that the latter is available for purposes of the execution of a confiscation order.

2. A request submitted pursuant to this article shall include:

(a) A copy of the order requesting preventive embargo, seizure or impoundment;
(b) A summary of the facts of the case, including a description of the offence, where and when it was committed and a reference to the relevant legal provisions;

(c) If possible, a description of the property in respect of which the provisional or precautionary measure is to be implemented or which is considered available for preventive embargo, seizure or impoundment; its commercial value; and its relation to the person against whom legal proceedings have been or are to be instituted;

(d) A statement of the amount to be embargoed, seized or impounded and the basis for the calculation of this amount; and

(e) An estimate of how long it will take for the case to be brought to trial and how long it will take for a final judgement to be handed down.

3. The competent authority of the requesting Party shall inform the competent authority of the requested Party of any change in the time frame referred to in paragraph (e) above, and shall indicate at the same time what stage the proceedings have reached.

4. The competent authorities of each Party shall promptly inform each other of any application filed or decision taken with respect to the embargo, seizure or impoundment requested or adopted.

5. The competent authority of the requested Party may set a condition limiting the duration of the measure requested and shall promptly notify the competent authority of the requesting Party, stating its reasons.

6. Any request shall be executed solely in accordance with the domestic law of the requested Party and, in particular, with strict respect for and guarantee of the rights of any person who may be affected by execution of the measure.

Article 15. Provision of documents, files and evidence

1. The requested Party may provide copies of the documents, files or evidence requested. If the requesting Party specifically requests that the originals be provided, the requested Party shall comply to the extent possible.

2. The requesting Party shall be obligated to return the originals of such documents as quickly as possible and no later than at the end of the proceedings unless the requested Party states that it does not wish to receive them.

3. Any rights to documents, files or evidence asserted by third parties in the requested Party shall not prevent the provision of a certified copy to the requesting Party.

Article 16. Proceeds of crime

1. Upon receiving a request for judicial assistance, the competent authorities of the requested Party shall endeavour to ascertain whether there are any proceeds or instruments of crime within their jurisdiction and shall notify the competent authorities of the requesting Party, through the central authorities, of the results of their inquiries. When making the request, the requesting Party shall notify the requested Party of the basis for its belief that such proceeds or instruments may be located within the latter's jurisdiction.

2. Where, pursuant to paragraph 1, proceeds or instruments of a crime referred to in the request for judicial assistance are found, the requested Party shall, at the request of the requesting Party, take such measures as are permitted under its laws to prevent any dealing in, transfer or disposal of such proceeds or instruments pending a final determination in respect thereof.

3. Where the person convicted of a crime retains ownership, possession or immediate control of the proceeds or instruments thereof and the sentence includes an order for a pecuniary penalty, confiscation of property or any other measure of a conclusive nature, the requested Party shall execute the sentence to the extent permissible under its domestic law.

4. Where the person convicted of a crime has disposed of the proceeds or instruments thereof, the competent authority of the requested Party shall, at the request of the competent authority of the requesting Party, determine whether the transferee obtained the property without knowing or suspecting that it was or may have been the proceeds or instruments of a crime. If the competent authority of the requested Party determines that the transferee did not act in good faith it shall order that the property be confiscated.

Article 17. Execution of confiscation orders

1. Where the request for assistance refers to a confiscation order, the competent authority of the requested Party may, without prejudice to the provisions of article 2:

(a) Execute the confiscation order issued by a competent authority of the requesting Party in respect of instruments or proceeds of a crime; or

(b) Initiate proceedings with a view to obtaining a confiscation order pursuant to its domestic law.

2. Without prejudice to the provisions of article 21 of this Agreement, for the purposes of this article, [the request] shall include the following:

(a) A copy of the confiscation order, duly certified by the judicial officer who issued the order;

(b) Information concerning the evidence upon which the confiscation order was based;

(c) Information indicating that the judgement is enforceable;

(d) Where appropriate, details regarding the property available for the execution or in respect of which judicial assistance is being requested, including the relationship between such property and the person named in the confiscation order;

(e) Where applicable and available, information concerning any records with regard to third parties' legitimate rights to or interests in the property mentioned in the request; and

(f) Any other information that may be helpful for purposes of executing the request for judicial assistance.

3. Where it is not possible under the domestic law of the requested Party to execute the request in full, the latter may execute the request to the extent possible and shall so state through the central authority.

4. The competent authority of the requested Party may ask for additional information or evidence with a view to executing the request.

5. The confiscation order shall be executed in accordance with the domestic law of the requested Party and, in particular, with respect for the rights of anyone who may be affected by execution of the order.

6. In any specific case, and according to the nature and extent of the cooperation provided, the Parties may agree on how to divide the value of the property obtained as a result of the requested Party's execution of the request pursuant to this article.

Article 18. Interests of bona fide third parties in the property

In accordance with the provisions of this Agreement, the competent authorities of the requested Party shall take, in accordance with their laws, such measures as are necessary to protect the interests and rights of bona fide third parties to the property affected by execution of requests for judicial assistance.

Any person affected by an order for preventive embargo, seizure, impoundment or confiscation may file an appeal with the competent authority of the requested Party as provided for under domestic law.

Article 19. Communication of trial records and documents and of judicial decisions

1. The requested Party shall communicate the trial records and documents and judicial decisions which have been sent for that purpose by the requesting Party.

2. Communication may be ensured by simply delivering the document or decision to the recipient. If specifically requested by the requesting Party, the requested Party shall ensure communication in one of the forms provided under its law for such communications or in any special form which is compatible with that law.

3. Proof of communication of the trial document shall be provided by a copy dated and signed by the recipient or a statement from the requested Party attesting to the act of communication and the form and date thereof. Any of these documents shall be sent immediately to the requesting Party. At the latter's request, the requested Party shall state whether the communication was ensured in accordance with its law. If it has been impossible to ensure the communication, the requested Party shall immediately inform the requesting Party of the reason.

CHAPTER III. PROCEDURE

Article 20. Content of the request

1. Requests for judicial assistance shall be made in writing. If the matter is urgent or if this is permitted by the requested Party, they may be sent by facsimile or by any other electronic means, but they must be made official as soon as possible and must contain at least the following information:

(a) The name of the issuing authority and, where applicable, the authority in charge of the judicial proceedings in the requesting State;

(b) The object and purpose of the request;

(c) Where appropriate, the full name, place and date of birth, nationality and address of the person to whom the request for assistance relates;

(d) A description of the events which gave rise to the investigation in the requesting Party, with the text of the legislation relevant to the crimes annexed thereto or included therein; and

(e) The deadline by which the requesting Party would like the request to be met.

2. The request shall also contain:

(a) In the case of the application of another State's law in the execution of the request (article 9, paragraph 2), the text of the legislation applicable in the requesting State and a statement of the grounds for its application;

(b) In the case of participation of persons in proceedings (article 3, paragraph 2), the names of the person who will attend and the reason for his or her presence;

(c) In the case of communication of trial records and documents (articles 11 and 19), the name and address of the recipient of the documents and subpoenas;

(d) In the case of summonses of witnesses or experts (article 11), a statement that the requesting Party will cover the costs of any per diem, honorarium or compensation, which shall be paid in advance upon request; and

(e) In the case of the delivery of persons in custody (article 13), the full names of the said persons.

Article 21. Execution of the request

1. If the request does not conform to the provisions of this Agreement, the central authority of the requested Party shall so inform the central authority of the requesting Party immediately and shall request it to modify or complete the request as quickly as possible, without prejudice to the adoption of the provisional measures mentioned in article 14.

2. If the request conforms to the Agreement, the central authority of the requested Party shall transmit it to the competent authority immediately.

3. Once the request has been executed, the competent authority shall submit it, together with any information and evidence obtained, to the central authority of the requested

Party, which shall verify that the execution has been accurate and complete and shall communicate the results to the central authority of the requesting Party.

Article 22. Exemption from authentication

1. Documents, records and evidence transmitted under this Agreement shall be exempt from all authentication procedures.

2. Documents, records and evidence transmitted by the central authority of the requested Party shall be accepted as evidence once they have been duly certified by the competent authority.

Article 23. Costs arising from the execution of the request

1. The requesting Party shall cover only the following costs arising from the execution of a request:

- (a) Compensation, travel expenses and per diem of witnesses or, where applicable, their representatives;
- (b) Costs associated with the delivery of persons in custody; and
- (c) Honoraria, travel expenses and other expenses of experts.

2. If it is anticipated that execution of the request will give rise to extraordinary costs, the requested Party shall so inform the requesting Party so that the conditions for execution of the request can be established.

CHAPTER IV. FINAL PROVISIONS

OTHER AGREEMENTS OR CONVENTIONS AND NATIONAL LAW

Article 24

The provisions of this Agreement shall be without prejudice to any broader assistance which has been or may be agreed between the Parties in other agreements or conventions or which may derive from domestic law or established practice.

Article 25. Consultations

1. The central authorities, if they deem it necessary, shall exchange views on the general application or execution of this Agreement or on specific instances thereof, either orally or in writing.

2. Any dispute arising between the Parties in relation to the interpretation or application of this Agreement shall be settled by means of consultations between the Parties through the diplomatic channel.

Article 26. Entry into force and denunciation

This Agreement is subject to ratification and shall enter into force thirty (30) days after the date of exchange of the respective instruments of ratification.

This Agreement shall remain in force indefinitely. Either Party may denounce it by giving written notification through the diplomatic channel.

Such denunciation shall take effect one hundred and eighty (180) days after the date on which the said notification is given.

DONE at Lima on 9 February 1999 in two original copies, both being equally authentic.

For the Government of the Argentine Republic:

GUIDO DI TELLA

For the Government of Peru:

FERNANDO DE TRZEGNIES

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD D'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

La République argentine et la République du Pérou, ci-après dénommées "les Parties", Désireuses de renforcer entre elles l'assistance judiciaire et la coopération en matière pénale,

Reconnaissant que la lutte contre la délinquance appelle les États à agir ensemble,

Conscientes de la nécessité d'engager des actions communes de prévention, de contrôle et de répression de la criminalité sous toutes ses formes en coordonnant et en exécutant des programmes concrets, et de renforcer les mécanismes d'entraide judiciaire,

Convaincues par l'accroissement des activités criminelles, de la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération et d'entraide judiciaire en matière pénale,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Définitions

I. Aux fins du présent Accord :

a) " Requête aux fins de l'entraide " et " requête d'entraide judiciaire " sont synonymes;

b) " Confiscation " s'entend de la privation définitive de biens ou des produits ou instruments d'une infraction, par décision d'une juridiction pénale ou d'une autre autorité compétente;

c) " Produit d'une infraction " s'entend de tout bien, de quelque nature que ce soit, obtenu directement ou indirectement par un individu quelconque de la commission d'une infraction, ou de la contre-valeur d'un tel bien;

d) " Bien " s'entend de tout avoir, de quelque nature que ce soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, ainsi que des titres ou actes judiciaires attestant la propriété d'un tel avoir ou la possession d'autres droits sur un tel avoir.

e) " Saisie conservatoire ", " blocage " et " mise sous séquestre " s'entendent de l'interdiction temporaire de céder, convertir, aliéner ou mobiliser un bien, ainsi que de la garde de biens aux fins de leur préservation par une juridiction ou autre autorité compétente.

Article 2. Obligation d'entraide

I. Les Parties s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Accord et aux prescriptions de leur ordre juridique respectif, une entraide aux fins d'enquête, de jugement et de procédure pénale concernant des faits qui ressortissent à la compétence de l'autorité compétente de la Partie requérante.

2. Toutefois, lorsque la requête aux fins de l'entraide concerne l'exécution de fouilles à corps, de perquisitions domiciliaires, de saisies ou mises sous séquestre de biens à des fins conservatoires, ou l'interception de communications téléphoniques sur mandat judiciaire dûment motivé, ou l'exécution de mesures qui supposent une coercition de quelque nature que ce soit, l'entraide n'est accordée que si des faits qui motivent la requête sont aussi constitutifs d'une infraction au regard de la loi de la Partie requise ou s'il apparaît que l'individu faisant l'objet de la procédure y a librement consenti par écrit.

Article 3. Champ d'application

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance en matière pénale aux fins de l'échange de renseignements et d'éléments de preuve, et aux fins de poursuites et des procédures criminelles. Cette assistance couvre notamment :

- a) La localisation et l'identification de personnes et de biens;
- b) La signification d'actes de procédure judiciaire;
- c) La remise de pièces et d'informations judiciaires;
- d) L'exécution de perquisitions domiciliaires et de descentes de justice;
- e) L'audition de témoins et l'interrogatoire d'inculpés;
- f) La citation et le transfèrement librement consenti de personnes en qualité d'inculpés, de témoins ou d'experts, aux fins du présent Accord;
- g) Le transfèrement de détenus aux fins de témoigner sur le territoire de la Partie requérante;
- h) La saisie, la mise sous séquestre et la confiscation de biens;
- i) Toute autre forme d'entraide autorisée par les lois de la Partie requise, selon des modalités conformes à sa législation.

2. Les Parties facilitent l'entrée et le séjour dans le territoire de l'État requis des représentants des autorités compétentes de la Partie requérante afin qu'ils assistent et participent à l'exécution des actions requises, sous réserve que cela ne contrevienne pas aux dispositions de la législation interne de l'État requis. Les fonctionnaires de la Partie requérante se conforment aux conditions fixées dans l'autorisation donnée par les autorités compétentes de la Partie requise.

3. Les Parties n'invoquent pas le secret bancaire pour refuser l'entraide visée au présent article.

Article 4. Restrictions à l'entraide

1. Sauf autorisation préalable de la Partie requise, la Partie requérante ne peut employer aucun renseignement ou élément de preuve obtenu en application du présent Accord à d'autres fins que celles que mentionne la requête aux fins de l'entraide.

2. Le présent Accord n'habilite aucune des Parties à exercer sur le territoire de l'État où les mesures sont exécutées des fonctions qui, aux termes de la législation interne de cet État, sont réservées aux autorités de celui-ci.

3. Le présent Accord ne s'applique pas :
- a) À l'arrestation d'un individu aux fins de son extradition, ni aux demandes d'extradition;
 - b) Au transfèrement d'un condamné aux fins de l'accomplissement de sa peine;
 - c) À l'assistance à des particuliers ou à des États tiers.

Article 5. Entraide conditionnelle

1. Si l'autorité compétente de la Partie requise constate que l'exécution d'une requête ferait obstacle à une instruction ou procédure pénale en cours sur son territoire, elle peut ajourner l'exécution de ladite requête ou l'exécuter sous les conditions qu'elle juge nécessaires.

2. L'Autorité centrale de la Partie requise notifie la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe précédent à l'Autorité centrale de la Partie requérante, afin que celle-ci accepte éventuellement et respecte les conditions de l'entraide.

3. Si la totalité ou une partie de la requête d'entraide ne peut être exécutée, la Partie requise en informe la Partie requérante en donnant expressément les motifs de l'inexécution, auquel cas la Partie requérante décide soit de maintenir sa requête soit de la retirer.

Article 6. Refus de l'entraide

1. La Partie requise peut refuser l'entraide lorsque :
- a) La requête est contraire à son ordre juridique ou n'est pas conforme aux dispositions du présent Accord;
 - b) L'exécution de la requête ferait à son avis obstacle à une instruction ou une procédure pénale en cours sur son territoire, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent Accord;
 - c) L'individu visé dans la requête d'entraide a été exonéré en dernière instance de toute responsabilité pénale ou, s'il a été condamné, a accompli sa peine ou cette peine a expiré.
 - d) L'instruction pénale a été ouverte dans le dessein d'engager des poursuites ou d'exercer une discrimination de quelque forme que ce soit contre un individu ou un groupe d'individus, notamment, pour des motifs de race, de sexe, de condition sociale, de nationalité, de religion, d'idéologie;
 - e) L'exécution des mesures demandées porterait atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sûreté nationale ou aux intérêts essentiels de la Partie requise;
 - f) La requête d'entraide se réfère à une infraction politique, militaire ou assimilée.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du rejet de sa requête par écrit, en exposant ses motifs.

Article 7. Autorités centrales

1. Aux fins du présent Accord, les Autorités centrales sont, pour l'Argentine, le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte et, pour la République du Pérou, le Ministère des relations extérieures.
2. L'Autorité centrale de la Partie requérante est celle qui transmet les requêtes d'entraide judiciaire visées dans le présent Accord qui émanent de ses tribunaux ou d'autres autorités.
3. Les Autorités centrales des deux Parties communiquent directement entre elles.

Article 8. Autorités compétentes

Les autorités compétentes sont, pour la République argentine, le pouvoir judiciaire et le ministère public et, pour la République du Pérou, le pouvoir judiciaire et le ministère public.

TITRE II. COMMUNICATION D'ÉLÉMENTS DE PREUVE

Article 9. Droit applicable

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les requêtes sont exécutées selon la législation de la Partie requise.
2. La Partie requise peut fournir son aide selon les formes et les procédures particulières prévues dans la requête à moins qu'elles ne soient incompatibles avec sa législation interne.

Article 10. Confidentialité

1. La Partie requise préserve le caractère confidentiel de la requête d'entraide judiciaire, à moins que la levée du secret ne soit nécessaire à l'exécution de celle-ci.
2. Si l'exécution de la requête exige la levée du secret, la Partie requise demande par écrit à la Partie requérante de donner son assentiment, faute duquel la requête n'est pas exécutée.
3. La Partie requérante préserve le caractère confidentiel des éléments de preuve et des renseignements fournis par la Partie requise, à moins que la levée du secret ne soit nécessaire à l'enquête ou aux procédures décrites dans la requête.

Article 11. Comparution dans le for de la Partie requérante

1. La requête d'entraide judiciaire adressée aux autorités compétentes de la Partie requise aux fins de citer un inculpé, un témoin ou un expert à comparaître devant les autorités compétentes de la Partie requérante doit être transmise par l'Autorité centrale de la Partie requérante au moins 45 jours avant la date fixée pour la comparution faisant l'objet de la requête.

Si tel n'est pas le cas, l'Autorité centrale de la Partie requise renvoie la requête à la Partie requérante. L'Autorité centrale de la Partie requise peut toutefois demander par écrit à la Partie requérante de prolonger le délai d'exécution.

2. L'autorité compétente de la Partie requise signifie la citation à comparaître conformément à la requête mais les dispositions en vigueur dans le for de la Partie requérante en matière de contrainte et de sanctions ne s'appliquent pas en cas de non-comparution.

3. La requête d'entraide judiciaire doit mentionner le montant des allocations de subsistance, des honoraires et des indemnités auxquels l'individu cité a droit du fait de sa comparution. L'intéressé, qu'il s'agisse d'un inculpé, d'un témoin ou d'un expert, est informé de la nature et du montant des paiements que la Partie requérante consent à lui régler.

4. Quiconque comparait dans le for de la Partie requérante en exécution d'une requête d'entraide est soumis à l'ordre juridique de cette partie.

Article 12. Sauf-conduit

1. Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui répond à une citation à comparaître devant les autorités judiciaires de la Partie requérante ne peut être poursuivi, détenu ni soumis à quelque autre forme de restriction de liberté sur le territoire de cette partie pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucun individu, quelle que soit sa nationalité, qui consent par écrit à comparaître devant les autorités compétentes de la Partie requérante aux fins de répondre de faits qui motivent des poursuites contre lui, ne peut être inculpé, arrêté ni soumis à aucune autre forme de restriction de liberté pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise différents de ceux qui sont mentionnés dans la citation à comparaître.

3. L'immunité que le présent article reconnaît à l'individu qui comparait s'éteint si l'intéressé, ayant la faculté de quitter le territoire de la Partie requérante, s'y trouve encore 15 jours civils après que sa présence a cessé d'être nécessaire, ou y revient après l'avoir quitté, sauf force majeure ou événement fortuit.

Article 13. Transfèrement temporaire d'un détenu

1. Tout individu détenu dans la Partie requise qui consent par écrit à comparaître dans le for de la Partie requérante aux fins de témoignage, de confrontation ou de quelque autre procédure, est transféré temporairement sur le territoire de la Partie requérante sous la condition qu'il reviendra sur le territoire de la Partie requise dans le délai indiqué par celle-ci et en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions de l'article 12.

2. Le transfèrement peut être refusé :

a) Si l'intéressé doit être présent à un procès pénal en cours dans le for de la Partie requise;

b) Si le transfèrement peut entraîner un prolongement de la détention de l'intéressé;
ou

c) Si certaines circonstances exceptionnelles s'opposent au transfèrement.

3. L'individu transféré doit rester détenu sur le territoire de la Partie requérante tant que l'autorité judiciaire de la Partie requise demande qu'il en soit ainsi.

Article 14. Mesures provisoires ou conservatoires

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 et en conformité avec celles du présent article, l'autorité compétente d'une Partie peut demander à celle de l'autre Partie d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire, de blocage ou de mise sous séquestre de biens afin de s'assurer de la disponibilité de ceux-ci pour l'exécution d'une ordonnance de confiscation les concernant.

2. La requête présentée en application du présent article doit être accompagnée des pièces ci-après :

a) Un exemplaire ou une copie de l'ordonnance de saisie conservatoire, de blocage ou de mise sous séquestre des biens concernés;

b) L'exposé des faits de l'espèce, y compris la description de l'infraction, la mention du lieu et du moment où elle a été commise, et un renvoi aux dispositions juridiques pertinentes;

c) Si possible, la description et la valeur marchande des biens à l'endroit desquels la mesure provisoire ou conservatoire est requise, ou qui sont considérés comme pouvant être l'objet d'une saisie conservatoire, d'un blocage ou d'une mise sous séquestre, ainsi que l'explication des relations entre ces biens et l'individu contre lequel l'action est ou sera engagée;

d) L'indication de la somme dont la saisie conservatoire, le blocage ou la mise sous séquestre sont requis, avec mention des éléments entrant dans le calcul;

e) L'estimation du temps qui s'écoulera avant que l'espèce soit mise en jugement et qu'une décision soit rendue en dernière instance.

3. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise de toute modification des délais dont il est question à l'alinéa e) du paragraphe précédent, en précisant le stade alors atteint par la procédure.

4. Les autorités compétentes des Parties s'informent sans délai de toute décision adoptée en matière de saisie conservatoire, de blocage ou de mise sous séquestre et de tout recours contre une telle décision.

5. L'autorité compétente de la Partie requise peut imposer comme condition une limite à la durée de la mesure demandée; elle notifie alors cette condition et en explique les motifs à l'autorité compétente de la Partie requérante.

6. Une requête est exécutée exclusivement selon la législation interne de la Partie requise; sont en particulier respectés et garantis les droits de toute personne qui pourrait être touchée par l'exécution de la mesure requise.

Article 15. Remise de documents, d'actes ou d'éléments de preuve

1. La Partie requise peut remettre des copies des documents, actes ou éléments de preuve demandés. Si la Partie requérante demande expressément les originaux, la Partie requise fait droit à cette demande dans toute la mesure possible.

2. La Partie requérante est tenue de restituer lesdits originaux dans les plus brefs délais et au plus tard à la fin du procès, à moins que la Partie requise n'y renonce.

3. Les droits que des tiers pourraient faire valoir sur des documents, actes ou éléments de preuve sur le territoire de la Partie requise n'empêchent pas celle-ci de remettre à la Partie requérante des copies certifiées conformes.

Article 16. Produits de l'infraction

1. Les autorités compétentes de la Partie requise, agissant en exécution d'une requête d'entraide judiciaire, procèdent aux recherches qui permettent de déterminer si quelque produit ou instrument de l'infraction se trouve dans leur for territorial, et font part de leurs résultats aux autorités compétentes de la Partie requérante par l'entremise des Autorités centrales. En présentant sa requête en ce sens, la Partie requérante indique à la Partie requise les raisons qui l'amènent à croire que tel produit ou instrument de l'infraction se trouve dans le for territorial de celle-ci.

2. Si des produits ou instruments de l'infraction mentionnés dans la requête d'entraide judiciaire sont trouvés dans le cadre de l'application du paragraphe 1, la Partie requise, agissant à la requête de la Partie requérante, adopte les mesures conservatoires permises par ses lois pour éviter toute transaction, cession ou aliénation visant lesdits produits ou instruments en attendant une décision définitive à leur endroit.

3. Si l'individu reconnu coupable d'une infraction conserve la propriété, la possession ou la détention des produits ou des instruments de cette infraction et que la sentence prévoit une obligation pécuniaire, ou si quelque autre peine définitive est prononcée, la Partie requise peut faire exécuter la sentence dans la mesure où le permet sa législation.

4. Si l'individu reconnu coupable d'une infraction a aliéné les produits ou instruments de cette infraction, l'autorité compétente de la Partie requise, agissant à la requête de la Partie requérante, détermine si le tiers détenteur desdits produits ou instruments les a obtenus sans savoir ni soupçonner qu'il s'agissait des produits ou instruments de l'infraction. Si l'autorité compétente de la Partie requise constate que le tiers n'a pas agi de bonne foi, elle ordonne la confiscation des biens.

Article 17. Exécution d'une ordonnance de confiscation

1. Si la requête d'entraide concerne une ordonnance de confiscation, l'autorité compétente de la Partie requise peut, sans préjudice des dispositions de l'article 2 :

a) Exécuter l'ordonnance de confiscation rendue par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'égard des produits ou instruments de l'infraction; ou

b) Engager une procédure pour obtenir une ordonnance de confiscation en conformité avec sa législation interne.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 21 du présent Accord, la requête visée dans le présent article doit être accompagnée des éléments suivants :

- a) Une copie de l'ordonnance de confiscation, dûment certifiée par l'officier de justice qui l'a délivrée;
- b) Des renseignements concernant les éléments de preuve sur la foi desquels a été rendue l'ordonnance de confiscation;
- c) Des renseignements indiquant que la décision de justice est dûment exécutoire;
- d) Le cas échéant, la description des biens disponibles pour l'exécution de la requête ou à l'égard desquels l'entraide judiciaire est requise, en précisant le rapport entre ces biens et la personne touchée par l'ordonnance de confiscation;
- e) Les renseignements pertinents connus quant à l'existence de droits ou d'intérêts légitimes de tiers sur les biens visés par la requête;
- f) Tout autre renseignement pouvant contribuer à l'exécution de la requête.

3. Si sa législation interne n'autorise pas l'exécution de la totalité de la requête, la Partie requise peut exécuter celle-ci dans la mesure autorisée; elle en informe la Partie requérante par l'entremise de l'Autorité centrale.

4. L'autorité compétente de la Partie requise peut demander de plus amples renseignements ou éléments de preuve avant d'exécuter la requête.

5. L'ordonnance de confiscation est exécutée en conformité avec la législation interne de la Partie requise et, en particulier, dans le respect des droits de toute personne qui pourrait être touchée par cette exécution.

6. Les Parties peuvent convenir dans chaque espèce, selon la nature et l'importance de leur collaboration, de la règle de répartition entre elles des biens recueillis à l'issue de l'exécution de la requête par la Partie requise en application du présent article.

Article 18. Intérêts sur des biens des tiers de bonne foi

Conformément aux dispositions du présent Accord, les autorités compétentes de la Partie requise adoptent, selon les lois qui les régissent, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de tiers de bonne foi sur des biens touchés par l'exécution des requêtes d'entraide judiciaire.

Toute personne touchée par une ordonnance de saisie conservatoire, de blocage, de mise sous séquestre ou de confiscation de biens peut opposer à l'autorité compétente de la Partie requise les recours prévus par la législation interne de cette partie.

Article 19. Signification des actes, pièces de procédure et décisions de justice

1. La Partie requise procède à la signification des actes, pièces de procédure et décisions de justice qui lui sont communiqués à cette fin par la Partie requérante.

2. La signification peut prendre la forme d'une simple remise à leur destinataire du document ou de la décision dont il s'agit. À la demande expresse de la Partie requérante, la Partie requise procède à la signification dans l'une des formes prévues par sa législation

pour les significations analogues ou selon quelque autre modalité particulière compatible avec cette législation.

3. La copie de la signification, datée et signée par son destinataire, ou la déclaration de la Partie requise attestant le fait, la forme et la date de la signification valent preuve que l'acte de procédure a été signifié. Le document valant preuve, quel qu'il soit, est immédiatement envoyé à la Partie requérante. À la demande de celle-ci, la Partie requise précise si la signification a été faite conformément à son droit interne. Le cas échéant, la Partie requise fait immédiatement connaître les raisons pour lesquelles la signification n'a pu avoir lieu.

TITRE III. PROCÉDURE

Article 20. Contenu de la requête

1. La requête aux fins de l'entraide judiciaire est présentée par écrit. En cas d'urgence, ou si la partie requise le permet, elle peut être présentée par télécopie ou quelque autre moyen électronique, sous réserve qu'elle soit confirmée dans les formes dans les plus brefs délais; elle contient les mentions suivantes :

- a) Dénomination de l'autorité compétente de qui émane la requête et, le cas échéant, de l'autorité chargée de la procédure pénale dans le for de la Partie requérante;
- b) Objet et motif de la requête;
- c) Le cas échéant, identité, lieu et date de naissance, nationalité et adresse de l'individu que la requête concerne;
- d) Description des faits donnant lieu à enquête sur le territoire de la partie requérante, accompagnée d'un exemplaire ou de la transcription des dispositions juridiques relatives à l'infraction;
- e) Délai dans lesquels la Partie requérante demande que la requête soit exécutée.

2. La requête présente également :

- a) Si la requête est exécutée en application du droit étranger, le texte des dispositions juridiques applicables sur le territoire de la Partie requérante et les raisons qui les rendent applicables (par. 2 de l'article 9);
- b) Si certains représentants interviennent dans la procédure (par. 2 de l'article 3), l'identité des personnes qui seront présentes, et les motifs de leur présence;
- c) S'il s'agit de la signification d'actes et de pièces (art. 11 et 19), l'identité et l'adresse du destinataire des pièces et des citations à comparaître;
- d) S'il s'agit de citer des témoins ou des experts (art. 11), leur déclaration selon laquelle la Partie requérante prend à sa charge les allocations de subsistance, les honoraires et les indemnités des intéressés, qui seront payés à l'avance sur demande;
- e) S'il s'agit du transfèrement d'un détenu (art. 13), l'identité de l'intéressé.

Article 21. Exécution de la requête

1. Si la requête n'est pas conforme aux dispositions du présent Accord, l'Autorité centrale de la Partie requise en avise immédiatement la Partie requérante, en lui demandant de la modifier ou de la compléter dans les délais les plus brefs, sans préjudice de l'adoption des mesures conservatoires visées à l'article 14.

2. Si la requête est conforme au présent Accord, l'Autorité centrale de la Partie requise la transmet immédiatement à l'autorité compétente.

3. Après l'exécution de la requête, l'autorité compétente la remet à l'Autorité centrale de la Partie requise, accompagnée le cas échéant des renseignements et des éléments de preuve recueillis. L'Autorité centrale de la Partie requise s'assure que la requête a été exécutée fidèlement et complètement et communique les résultats à l'Autorité centrale de la Partie requérante.

Article 22. Dispense d'authentification

1. Les documents, pièces ou éléments de preuve communiqués en application du présent Accord sont dispensés de toutes les formalités d'authentification.

2. Les documents, pièces ou éléments de preuve transmis par l'Autorité centrale de la Partie requise valent moyens de preuve lorsqu'ils sont dûment authentifiés par l'autorité compétente.

Article 23. Frais liés à l'exécution de la requête

1. La Partie requérante prend seulement à sa charge les frais ci-dessous lorsqu'ils sont exposés pour faire droit à la requête d'entraide judiciaire :

- a) Indemnités, frais de voyage et allocations de subsistance des témoins et, le cas échéant, de leurs représentants;
- b) Frais de transfèrement des détenus;
- c) Honoraires, frais de voyage et autres frais des experts.

2. Si l'exécution d'une requête est censée entraîner des frais inhabituels, la Partie requise en avise la Partie requérante afin de fixer avec elle les conditions auxquelles la requête sera exécutée.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

AUTRES ACCORDS, AUTRES CONVENTIONS, LÉGISLATIONS NATIONALES

Article 24

Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice de l'assistance plus large dont les Parties sont convenues ou pourraient convenir dans d'autres accords ou conventions, qui découlerait de leur législation interne ou répondrait à une pratique établie.

Article 25. Consultations

1. Si elles le jugent utile, les Autorités centrales échangent leurs vues, oralement ou par écrit, sur l'application ou l'exécution du présent Accord, d'un point de vue général ou relativement à un cas d'espèce.

2. Tout différend apparaissant entre les Parties à propos de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est résolu par consultations entre elles par la voie diplomatique.

Article 26. Entrée en vigueur; dénonciation

Le présent Accord doit être ratifié; il entre en vigueur trente (30) jours après la date de l'échange des instruments de ratification.

Le présent Accord reste en vigueur indéfiniment. L'une des Parties peut le dénoncer, moyennant notification écrite adressée à l'autre par la voie diplomatique.

La dénonciation prend effet 180 jours après la date de la notification.

Fait à Lima le 9 février 1999, en deux exemplaires originaux faisant également foi.

Pour la République argentine :

GUIDO DI TELLA

Pour la République du Pérou :

FERNANDO DE TRZEGNIES